

La antigua hacienda que los hermanos Castaño despojaron, luego entregaron a parceleros y después les volvieron a quitar, ya fue devuelta a varios campesinos. Ahora, ellos le piden al gobierno apoyo para construir sus casas y cultivar la tierra.

Fernán Bula arranca de las enredaderas una maracuyá brillante. Sonríe y dice que atrás quedaron sus días en Montería, donde, a sus 59 años, se rebuscaba el sustento cargando bultos. “Por fin pude volver a mi parcela. Aquí tengo un cultivo de fruta y le doy empleo a cuatro personas”, dice el campesino, quien desde hace más de una década no había podido pisar su tierra, pese a estar a tan solo 17 kilómetros de la capital de Córdoba.

Así como Bula, otros 124 labriegos y sus familias han sido notificados durante los dos últimos años por jueces especializados en restitución de tierras de Antioquia de la devolución de sus parcelas, lo que significa que ya pueden retornar a ellas. Desde hace seis meses, por lo menos 60 familias volvieron a sus antiguos predios.

Estos parceleros fueron víctimas de los hermanos Castaño, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quienes los despojaron entre 1999 y 2000 de la antigua Hacienda Santa Paula, de 1.195 hectáreas, en el corregimiento de Leticia, en Montería.

Si bien después de tantos años pocos se atreven a pronunciar los nombres de sus victimarios, las autoridades han venido trabajando en sus casos y el pasado 15 de marzo el CTI de la Fiscalía capturó a tres personas que fueron señaladas en los juicios de restitución de haber sido cómplices de ese despojo. Se trata de Gabriela Inés Henao Montoya, Manuel Benito Causil Díaz y Lázaro de León de León, quienes fueron acusados del delito de desplazamiento forzado.

La Unidad de Restitución de Tierras documentó que Henao fue la mujer que entre finales de 1999 y 2000 buscó a los labriegos y los obligó a que le vendieran los predios a un millón de pesos, un precio muy por debajo del costo comercial de las apetecidas tierras de Córdoba. Su esposo es Diego Alonso Sierra, vinculado al caso del llamado ‘Parqueadero Padilla’, considerado en su momento el centro de finanzas de las Accu, allanado por la Fiscalía en 1998 en Medellín.

De León de León fue el entonces Notario 2 de Montería que firmó las escrituras para que Henao se hiciera a 97 parcelas que sumaban 600 hectáreas. Causil Díaz fue director de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), la organización de los Castaño que primero entregó tierras a los campesinos y luego los presionó para

salir de ellas.

Los parceleros admiten que aún sienten temor, pero también reconocen que no los frena para comenzar de nuevo. “Fue mucha la felicidad cuando los vecinos nos volvimos a encontrar. Fueron quince años desplazados, sin saber el uno del otro”, cuenta un campesino mientras busca la sombra de un árbol para soportar los cuarenta grados que sofocan a la Santa Paula.

Volver a empezar

Lo que puede verse de la extensa hacienda, a cuarenta y cinco minutos desde Montería por una vía polvorienta, pero transitable, es un gran potrero de pastos secos y chamizos. Beatriz Arciniegas, líder de las mujeres madres cabeza de familia de la Santa Paula, cuenta que hace unos seis meses, cuando comenzó el retorno, lo primero que hicieron fue parcelar sus predios de acuerdo con las medidas consignadas en la sentencia de tierras.

Pero lo más difícil ha sido permanecer días enteros bajo los rayos del sol. Antonio Anaya fue de los pocos afortunados. En su parcela, los opositores al proceso de restitución y en el momento en que él estuvo desplazado construyeron una amplia casa en ladrillo. Aunque los que vivían allí antes arrancaron los marcos de madera de la ventana antes de irse, los muros y los techos quedaron intactos.

“Me enteré del proceso de restitución por televisión. Vi que ya eso estaba andando en Montes de María (región entre Sucre y Bolívar). Tenía temor pero ahora estamos tranquilos. La policía nos está respaldando todo el día. Desde la mañanita hasta la noche”, dice Anaya, quien a sus 68 años siente que aún tiene fuerzas para hacer productiva su tierra. Cultiva yuca y plátano, ordeña las vacas que un vecino le presta y a punta de pequeños tubos de PVC construyó un corral en el que espera criar pollos.

Los otros parceleros han buscado a Anaya para que durante el día los deje descansar en la casa. Tienden las hamacas y esteras, buscando un rato de sombra. Desde que comenzó el retorno, los campesinos no han dejado de ir un solo día. Otros han construido improvisados refugios con palma y plástico para soportar la jornada, pues tienen mucho por limpiar y cultivar. La jornada en el campo comienza a las seis de la mañana y termina a la una de la tarde. Luego, se organizan para los quehaceres de la casa.

“Acá lo urgente son las viviendas. Si viene el viento y la lluvia, ¿a dónde voy a parar

con mi familia?”, pregunta Luis Alberto Franco, quien espera que el gobierno les cumpla con la promesa de que en junio de este año habrá ya 23 casas construidas. Así lo aseguró Juan Carlos Ortega, gerente nacional de Vivienda Rural del Banco Agrario, quien explicó que las viviendas con dimensiones de ocho por cinco, es de decir, de 40 metros cuadrados, serán construidas por la Fundación Horizonte y los diseños serán socializados con la comunidad.

“Hay dos diseños de casa. Uno abierto y otro cerrado. Es curioso que en varias zonas donde hemos presentado los modelos, los campesinos nos dicen que prefieren el segundo. Esto quizá sea una muestra de la marca del miedo que dejó la violencia en las familias”, señaló Ortega.

Mientras las viviendas son una realidad, los campesinos tratan de levantar cultivos de pancoger, principalmente maracuyá, plátano y yuca, con recursos del programa de Proyectos Productivos que impulsa la Unidad de Restitución de Tierras. Según datos de esta institución, para Córdoba asignaron hasta ahora 3 mil 100 millones de pesos, que han favorecido a 136 familias en el departamento, de las cuales 116 son de la antigua hacienda Santa Paula.

Todos sueñan con reconstruir su tejido comunitario y que algún día, no muy lejano, tengan su casa y cultivos en producción. Beatriz Arciniegas, por ejemplo, cuenta que está esperando que su hija obtenga su título de ingeniera ambiental, carrera que le ha costado el trabajo de muchos años vendiendo fritos. “Se nos ocurrió una idea, un proyecto que queremos desarrollar en la parcela. Vamos a esperar a tener la casa y claro, a que ella se gradúe”, dice orgullosa.

La mayoría de los campesinos que han regresado son personas de más de 60 años de edad. Cuando las parcelas estén en mejores condiciones esperan que sus hijos conozcan y sientan apego por el campo. Aunque reconocen que todavía tienen recuerdos muy duros de la violencia, creen que hay garantías para estar allá y salir adelante.

El pasado de la hacienda

La Santa Paula es una historia de despojo. En los años ochenta, los hermanos Castaño que ya tenían un grupo paramilitar, conocido como ‘Los mochacabezas’, ‘Los tangueros’ o ‘Los magníficos’, amenazaron y asesinaron a los antiguos dueños de extensas tierras en Córdoba. Así fue que acumularon por lo menos 10 mil hectáreas con las haciendas Santa Paula y Cedro Cocido; este último lo dividieron en los predios Cedro Cocido, Los Chavarríes, Arquía y Micono; todos en Montería, y

las haciendas Las Tangas, Jaragüay, Santa Mónica y Roma, en Valencia (Lea: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada).

En 1990, bajo una supuesta figura de donación y con todo tipo de cláusulas, que incluye asuntos como que solo podían cultivar lo que ellos dijeran, los Castaño crearon la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor) y “donaron” estas tierras, por medio de parcelas, a los campesinos de la región. Entre ellas estaba la Santa Paula (Lea: La estrategia de despojo de tierras de los hermanos Castaño).

La supuesta ‘reforma agraria’, es decir la distribución de la propiedad rural a personas pobres, impulsada por el clan Castaño, no era otra cosa que una estrategia para ocultar los bienes que despojaron con violencia. En el caso de la Santa Paula, en 1999 los Castaño les dijeron a los parceleros que tenían que abandonar las tierras o venderles a bajos precios. Según lo documentó la Unidad de Restitución, los jefes paramilitares usaron a varios cómplices para que los títulos de las tierras quedaran a nombres de nuevas personas.

Una de ellas fue Gabriela Inés Henao, quien junto a su esposo Diego Alonso Sierra, se presentaron como opositores en varias demandas que radicó la Unidad de Restitución ante los jueces especializados de tierras de Antioquia. En 1999, Henao aparecía como la titular de casi un centenar de parcelas que fueron registradas en la Notaría Segunda de Montería, cuando el notario era Lázaro de León de León.

La presión también fue ejercida por Sor Teresa Gómez Álvarez, mujer de confianza de los hermanos Castaño, quien fue la representante legal de Funpazcor y después de varios años de vivir en la clandestinidad fue capturada el 8 de octubre de 2013 tras haber sido condenada a 40 años de cárcel por conformación de grupos armados ilegales y asesinato. Gómez fue responsable de despojos en los territorios de Curvaradó y Juguamiandó en el Chocó; en el Urabá antioqueño, en el sector de Tulapas y en Mutatá; así como en Córdoba, entre ellos, el caso de la hacienda Santa Paula (Lea: Sor Teresa Gómez y la ambición por la tierra).

Gómez es además responsable del homicidio de la líder reclamante de tierras Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007. Ella era conocida entre los parceleros de Santa Paula por ser la persona que los motivaba a recuperar sus tierras y volver a ellas. Tras su muerte, los campesinos desistieron de sus intenciones y siguieron desplazados hasta 2012, cuando comenzó el proceso de restitución de tierras en la región.

Desde esa época, con todas las dificultades que implica comenzar una nueva vida, los parceleros dicen que están unidos y que harán todo lo posible para hacer productivas las tierras de la antigua Santa Paula.

www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5297-los-retonos-en-la-santa-paula-cordoba